

Pueblos de Chiapas: una democracia a la defensiva

MARIE-ODILE MARION S.

1. INTRODUCCIÓN

El estado de Chiapas es desde hace más de diez años el teatro de una serie de acciones críticas, algunas particularmente violentas, que traducen un estado de profundo malestar social y la emergencia de nuevas formas de lucha campesina. Las reiteradas expresiones de insatisfacción popular, aunadas a la irrupción de nuevos tipos de movilización, indican que en dicho estado (en donde se reproducen por lo demás formas de control social extremadamente anticuadas) surge un movimiento popular con fuertes tendencias a homogeneizarse fuera de los canales de control y de expresión campesina de extracción oficial. El objetivo de este estudio es ordenar la información disponible en relación con la movilización campesina reciente, para esbozar un cuadro analítico de las principales formas de lucha, reivindicaciones y alternativas de cambio sociopolítico que propugnan los jornaleros agrícolas, comuneros indígenas y ejidatarios chiapanecos, en su cotidiana lucha agraria.

En Chiapas no existe “un movimiento campesino”, sino más bien una constante agitación de la base campesina más amenazada en su capacidad de reproducción, tanto económica como social. En muchos casos la lucha agraria se tiñe de matices etnoculturales, puesto que la gran mayoría de las comunidades movilizadas son remanentes o integrantes de grupos indígenas secularmente controlados por los miembros de la burguesía agraria estatal. Sin embargo, no podemos hablar de la lucha campesina chiapaneca como de una guerrilla interétnica en sí, aunque los actores sociales involucrados en los distintos conflictos provegan de varios grupos étnicos y por mucho que sus adversarios sean descendientes de terratenientes chiapanecos o herederos de familias extranjeras radicadas en el estado desde el amanecer del porfirismo. Cabría más destacar el repentino auge de la dinámica social que empuja a los campesinos, desde los límites de Tabasco hasta la frontera guatemalteca, a denunciar abusos, exigir restitución de tierras, imponer la creación de un sindicato independiente o el fomento de una unión de productores, independientemente de sus diferencias etnoculturales y de las barreras sociales artificialmente impuestas por la oligarquía

chiapaneca, desde que tomó el mando del proceso de desarrollo "civilizador" en la entidad.

Quizá deberíamos plantear que se está perfilando en Chiapas el inicio de un movimiento que aspira a la homogeneización, pero que hasta ahora se ha caracterizado por estallidos inconexos de violencia, por formas diversas de lucha y por la identificación a veces ambigua de los adversarios inmediatos. En ciertos conflictos, los caciques son señalados como responsables de la crisis, en otros la administración tanto civil como policiaca, en otros, los terratenientes (madereros, ganaderos, caficultores, etcétera) son el blanco de los denunciantes; en otro tipo de movimiento, el gobierno (estatal e inclusive federal) es denunciado como responsable de los daños y perjuicios de que son víctimas los campesinos movilizados.

Pero en la mayoría de los casos, atrás del relato un tanto profuso de medidas represivas y expoliadoras, donde afloran el rencor y la sed de justicia, se denota un profundo y reiterado cuestionamiento de las estructuras de control social; mismas que han permitido, desde hace un siglo y medio, el despegue económico del estado mediante la abrumadora opresión de cientos de miles de peones acasillados, jornaleros de plantaciones y haciendas y pequeños productores arrendatarios de tierras, entregados a la voracidad de los "dueños" del estado.

En razón, quizá, de la complejidad de situaciones de dependencia socio-económica, estalla hoy una serie de conflictos, algunos relacionados entre sí, otros aparentemente inconexos, que plantean todas nuevas alternativas de sociedad. Algunos de esos movimientos podríamos ubicarlos en su largo historial de sujeción-sublevación. Otros son de reciente inicio (por ser sus actores de reciente asentamiento o por haberse repentinamente deteriorado su capacidad de extracción de recursos). Sin embargo, lo notable del caso chiapaneco es que la movilización social que observamos actualmente no se remonta a más de 15 años (con las características particulares que presentamos). Y lo más extraño quizá consiste en que esa nueva ordenación de las fuerzas sociales en lucha acompañó la penetración en Chiapas de organizaciones políticas emergentes de la crisis social de 1968. En efecto, es a partir de la década de los años 70, que la movilización campesina chiapaneca empezó a perfilarse a través de intentos esporádicos (porque fueron inmediatamente reprimidos, pero constantemente reactivados) de organización político-agraria.

En 1974, empiezan a organizarse los ejidos tzeltales de la selva lacandona, mediante la asesoría de militantes de la "línea de masas", universitarios radicales "desmovilizados" a raíz de la represión del 68, que intentaron extender hacia zonas rurales del interior de la República sus modelos de desarrollo paralelo, basados sobre el fomento de uniones de crédito ajenas al control del aparato crediticio oficial y la educación política de los integrantes de los núcleos de producción por ellos diseñados. En sus esfuerzos se adhirieron inclusive, durante una corta temporada, a los miembros del clero local, particularmente radical, en el caso del obispado de los Al-

tos de Chiapas. Su labor clandestina, paciente y constante en esa zona marginada que resulta ser la selva chiapaneca, ha permitido cimentar las bases de una organización campesina que lleva en sí los gérmenes de una tenaz resistencia al sistema de explotación de los recursos humanos y naturales, que ha lamentable y secularmente prevalecido en las selváticas tierras de Marqués de Comillas, Palenque, Ocosingo y Altamirano.

A partir de 1973 se inicia la lucha por la recuperación de tierras y la denuncia de represión caciquil que ha llevado a los comuneros de Venustiano Carranza a ocupar el primer lugar en la escena de los conflictos estatales. A principios de los 80, Carranza se afilia a la CNPA¹ y su lucha agraria se fortalece y ensancha, solidarizándose con la lucha política agraria de otras comunidades campesinas del país. Es durante el sexenio echeverriísta que irrumpe la CIOAC² en el estado de Chiapas y por su mismo programa político-sindical, permea las comunidades septentrionales del estado, caracterizadas por la reproducción de grandes contingentes de trabajadores acasillados, que dicha central independiente se propone organizar y luego sindicalizar.

Después de recibir un primer golpe, en el verano del 77 (al igual que los colonos de la selva y los comuneros de Carranza), los militantes de la CIOAC reinician sus actividades e intentan constituir un sindicato independiente a principios de 1980. Poco a poco dicha organización campesina logra extenderse hacia el sur del estado y se conforma al pasar de los años como una alternativa de lucha política viable para trabajadores agrícolas, ejidatarios y minifundistas de municipios tanto costeros como selváticos, de la depresión central y de los Altos. Su mayor logro indudablemente fue ordenar las diversas reivindicaciones y problemáticas, así como organizar las distintas formas de lucha en un marco más homogéneo, que otorga mayor audiencia a sus agremiados.

Ante tales nuevas formas de organización "sindicales" o "partidarias", el Estado tuvo que intervenir brutalmente (en 1977, enviando el ejército a reprimir los focos de subversión) o insidiosamente, cooptando líderes y logrando la frustración de los esfuerzos de organización y la homogeneización de los criterios de lucha (1978, escisión de un grupo de comuneros en Carranza y penetración de la CNC, por cooptación de un líder local). Esos esfuerzos, afanosamente desplegados por el Estado para dismantelar o reintroducir en unos cauces más oficiales los movimientos más "subversivos", caracterizan el historial agrario reciente de Chiapas. Los movimientos que pretenden mantener el diálogo con base en negociaciones con el aparato de Estado se arriesgan constantemente a ser desvirtuados, cooptados o brutalmente reprimidos. Los que se niegan a "entrar en el juego", a "participar" con el gobierno, guardando anonimato, semiclandestinidad y permaneciendo aparentemente al margen de la contienda política, negándose a dejarse mediar por la "farsa parlamentaria", se restan por lo

¹ Coordinación Nacional Plan de Ayala.

² Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos.

tanto el recurso de reclamar ante la opinión pública el ser feroz y clandestinamente reprimidos. Los primeros se mantienen en la periferia del sistema, en un espacio precario que se encoge repentinamente al azar de un cambio de sexenio (1977) o del nombramiento de un gabinete estatal menos moderado (1983). Los demás permanecen al margen del sistema, negándose a participar y arriesgando hasta la integridad física y territorial de los campesinos por ellos asesorados (incendios de pueblos, asesinatos múltiples, etcétera).

El camino de la democracia en Chiapas se asemeja a esas brechas selváticas, tercamente trazadas a machetazos por campesinos callados y testarudos, que constantemente vuelve a cubrir la maleza y la enramada tropical, pero en esta destrucción regular y sistemática de los canales democráticos, interviene tan sólo el Estado, recurriendo en su caso al aniquilamiento del actor social y al desmantelamiento de los aparatos e instancias de resistencia popular.³ Ante ese enemigo implacable que es el Estado nacional no existe lucha perenne. Pero por caduca que sea la acción social, su resurgimiento indica que las semillas sembradas no dejan de germinar en coyunturas favorables, al amanecer de un nuevo ciclo de "apertura" política, o cuando la tensión social no ha logrado ser despresurizada por ningún recurso oficial.

Y en Chiapas la lucha ya no es tan esporádica ni errática ni desconexa. La movilización se volvió constante, multifacética y polimorfa. La lucha se quiere permanente y el actor social, como el colono selvático, no permite ya a la maleza recubrir de sombra y olvido esta senda por él trazada, que posiblemente abrirá surco a los caminos de la democracia.

2. CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO

2.1. *Regiones*

El estado de Chiapas se extiende sobre una superficie de 7 388 700 has.; y por su extensión representa el 3.8% de la superficie territorial nacional.⁴ Colinda al norte con el estado de Tabasco, al oeste con la República de Guatemala, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz.

Se divide en 6 regiones naturales que ofrecen grandes contrastes entre sí; se trata de:

1) La planicie costera, localizada en el istmo chiapaneco, la cual comprende a su vez el valle del Soconusco. Sus centros principales de desarrollo son Tapachula y Arriaga. Esta región está especializada en la ganadería

³ Sergio Zermeno, "Adiós al 68", en *Nexos*, septiembre de 1984.

⁴ SARE, "Plan de desarrollo agropecuario y forestal de Chiapas, 1982-1988", tomo 1, p. 13.

bovina desde hace varias décadas y en la producción cafetalera en el Soconusco.

2) La zona de la Sierra Madre, caracterizada por un desarrollo demográfico tardío y por proveer de fuerza de trabajo a las plantaciones cafetaleras del Soconusco.

3) La zona de los Valles Centrales, recientemente transformada por la construcción de grandes obras hidroeléctricas, cuyos principales centros de desarrollo son Tuxtla Gutiérrez, Chicoasén, Ocozocuaula y Cintalapa. Su producción es mixta: agropecuaria, forestal, cañera y cafetalera.

4) La Meseta Central, conocida como Los Altos, zona indígena concentrada alrededor de San Cristóbal de las Casas y Comitán, casi exclusivamente productora de materias primas agrícolas (maíz).

5) El Norte, caracterizado por su tipo de desarrollo desigual, combina la expansión ganadera, la producción cafetícola y la explotación petrolera en detrimento de la producción cerealera de corte tradicional. Sus principales centros de desarrollo son Reforma Juárez, Simojovel, Pichucalco, Yajalón y Palenque.

6) La selva, zona de inmensas reservas forestales amenazadas por la colonización desordenada, la tala inmoderada y la ganadería. El centro principal de desarrollo es Ocosingo.

2.2. *Producción: Los grandes sectores de la economía*

2.2.1. *Electricidad*

Chiapas es el primer productor de energía eléctrica del país, al contar con un sistema hidrológico muy importante formado por los ríos Grijalva y Usumacinta, los de la Sierra de Huitepec y los de la vertiente del Pacífico; que, en su conjunto, representan el 30% del volumen hidrológico transportado en el país, con alrededor de 121 457 millones de m³ de agua disponible para riego. Tal potencial hidrológico ha sido parcialmente captado y aprovechado en forma de gigantescas obras de infraestructura hidroeléctrica, las que han generado 37.9% de la energía eléctrica consumida en el país⁵ (o sea 1 980 megawatts de los 5 219 mw que producía México en 1980), en las 11 plantas hidrotérmicas que fueron construidas desde 1959. La construcción de las presas y de las plantas generó asimismo ocupación para grandes cantidades de trabajadores chiapanecos, pero al mismo tiempo provocó la inundación de miles de hectáreas de tierras en producción y obligó al Estado a tomar medidas en vista del reacomodo de los campesinos afectados. El desarrollo de la industria hidrotérmica es una de las causas importantes del malestar, de la movilización, así como de la organización independiente del campesinado en Chiapas.

⁵ SPP, "Las actividades económicas en México", cuadro II, 2-32, p. 328.

2.2.2. *Petróleo*

Chiapas cuenta además con una importante reserva de hidrocarburos y particularmente en la parte norte del estado, en colindancia con el estado de Tabasco. Si en 1979, las reservas confirmadas por el Instituto Mexicano del Petróleo para la región de Reforma ascendían a 14 mil millones de barriles, la misma fuente pronosticaba poco tiempo después que las reservas probables llegaban a 29.2 mil millones de barriles, mientras las potenciales alcanzaban 120 mil millones de barriles.⁶

Chiapas produce actualmente 21.9% de la producción nacional de crudo y el desarrollo espectacular de dicha explotación ha contribuido a agudizar la problemática de desigualdad socioeconómica endémica en el estado, favoreciendo a ciertos sectores de población y desposeyendo o expulsando gran cantidad de pequeños productores, a la vez que provocaba la contaminación y el deterioro ambiental de vastas regiones.

2.2.3. *Actividades agropecuarias*

Agricultura

Las tierras de cultivo ocupan una superficie de aproximadamente 830 mil has.,⁷ lo cual representa tan sólo el 60% de las tierras aprovechables. Resulta que en Chiapas las superficies laborables van dejando paso a la producción pecuaria y a la explotación forestal, como lo indica el siguiente cuadro:

SECTORES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
(en porcentajes)

Sectores	1977	1978	1979	1980
Agrícola	65.7	68	65.4	62.4
Pecuario	32.4	30.8	32.4	35.2
Forestal	1.9	1.2	1.9	2.4

(FUENTE: *El mercado de valores*, 1982, p. 1237).

Si bien, en términos absolutos, el maíz sigue siendo la producción agrícola más importante en cuanto a rendimientos, en cambio un producto

⁶ Ángel Bassols Batalla, "Recursos naturales de México", *Teoría, conocimiento y uso*, p. 3.

⁷ SARH, *op. cit.*, p. 14.

de agricultura comercial como es el café se ha extendido considerablemente en la entidad sobre tierras tradicionalmente cerealeras, hasta conformar el 50% de la producción nacional. Se produce el café tanto en el sur del estado como en los municipios septentrionales, recurriendo para ello a la contratación de trabajadores temporales indígenas y mestizos pobres, en fincas cafetaleras de gran tamaño. El café también se produce en la actualidad en ciertas comunidades de la zona selvática (municipio de Ocosingo), de la meseta central (municipios de Las Margaritas y Comitán) y del norte (Bochil, Simojovel, etcétera).

La agricultura comercial se complementa con otros productos de exportación, como son el algodón, el plátano, el cacao, el ganado y los productos forestales, que en conjunto forman el 80%⁸ de la producción agropecuaria global del estado. En los últimos 10 años, el ganado y la silvicultura han restado tierras a la agricultura de consumo popular, al mismo tiempo que las actividades de agricultura comercial se extendían progresivamente entre las comunidades cerealeras, invadiendo tierras e involucrando mayor cantidad de recursos humanos en su proceso de reproducción.

Ganadería

El notable desarrollo de la ganadería en el estado en los últimos años se explica en gran parte por la necesidad que tienen los dueños de grandes extensiones de comprobar la legitimidad y legalidad de sus propiedades. Este fenómeno de ganaderización se ha traducido en un aumento del 84%⁹ de la producción pecuaria, llevando a Chiapas a ocupar el quinto lugar nacional.¹⁰ Tan rápido crecimiento se ha llevado a cabo mediante el acaparamiento de tierras cerealeras, de tal manera que la superficie total de las áreas de pastoreo alcanza ya los 2 millones de has., o sea, la cuarta parte de la superficie total del estado. La producción pecuaria es mayormente de bovinos (77.2%) y se destina esencialmente a la comercialización en mercados nacionales, mientras que menos del 30% se consume localmente.¹¹

Todas las regiones del estado se han orientado progresivamente hacia la ganadería extensiva, de la planicie costera hacia el norte del estado, pasando por la meseta central e involucrando más recientemente a la zona selvática, desde Ocosingo y Palenque.

La mayor parte de la producción ganadera se da en explotaciones privadas y ese porcentaje es inclusive mayor que el promedio nacional registrado al respecto.

⁸ *Ibid.*, cuadro 2.

⁹ *Ibid.*, cuadro 49.

¹⁰ *Ibid.*, p. 15.

¹¹ *Ibid.*, p. 15.

REPARTICIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
POR TIPO DE EXPLOTACIÓN (1970)

	<i>Chiapas</i>	<i>Nacional</i>
Ejidal	18.5%	22.4%
Privado	81.5%	77.6%

(FUENTE: *Unomásuno*, 12 de junio de 1983.)

Tal desproporción se explica en términos absolutos por el hecho de que, en 1983, 149 ganaderos controlaban el 80% de la producción pecuaria estatal; en esa entidad existen más de 2 500 latifundios protegidos por las poderosas asociaciones ganaderas.¹² Para lograr su proyecto de acumulación, los ganaderos no han vacilado en transformar tierras de cultivo en pastizales; actualmente, 300 mil has. de tierras agrícolas han sido ocupadas por el ganado; considerando que se estima en 20 has. la superficie necesaria para la engorda de un solo animal, se entiende por qué anualmente los ganaderos de Chiapas arrebatan un promedio de 100 has. de milpas a indígenas miniproductores cerealeros, de manera violenta, provocando una serie de conflictos sociales de difícil solución y el desajuste de la economía campesina en las zonas afectadas, puesto que los ganaderos generalmente logran obtener certificados de inafectabilidad sobre las tierras expropiadas.

Asimismo cabe mencionar que la actividad ganadera que se lleva a cabo en la entidad es rústica y no considera la posibilidad de modernizar las formas y técnicas de producción; el sobrepastoreo tiene entonces como corolario el empobrecimiento extremo de los suelos y la obligación de seguir extendiendo siempre las áreas de pastoreo, en detrimento de la población campesina, pero también de las tierras agrícolas y de las áreas silvícolas.

Silvicultura

El 80% del estado está cubierto por bosques, selvas y áreas forestales parcial o totalmente desmontadas. De esta superficie total arbolada, la selva solamente ocupa ya el 36% con una extensión de 2 125 725 has.¹³ La extracción de maderas preciosas y de construcción se inició a fines del siglo pasado y se prosigue en la actualidad de forma tan continua como irracional; provocando el deterioro irreversible de las zonas en explotación. Puesto que el consumo y la consecuente extracción de maderas preciosas se ha

¹² Rutsch Metchild, *La cuestión ganadera en México*, pp. 15-25.

¹³ SARH, *op. cit.*, mapa 23.

incrementado en los últimos 20 años, la explotación silvícola se lleva a cabo de forma poco diversificada (mayormente caoba) y abre el paso a la ganaderización de las áreas selváticas (más del 30% de dicha superficie ha sido recientemente transformada en agostaderos extensivos). La selva ha sido, en los últimos 30 años, una tierra de refugio para miles de campesinos expoliados, a raíz del proceso de expropiación de sus tierras por obras de infraestructura hidráulica o de prospección y explotación petrolera; y resulta ser entonces un receptáculo de latente malestar, donde se reproducen conflictos intercomunitarios o interpersonales (entre ganaderos y colonos selváticos), pero donde también se dan procesos nuevos de organización y gestión comunitaria que escapan totalmente del control de las instancias oficiales, tanto políticas como crediticias o corporativas.

Una primera observación de la información estadística en términos empíricos plantea que la economía chiapaneca está determinada por cuatro grandes ejes, los que a su vez permitirán analizar los fundamentos del malestar social campesino:

- Un desarrollo espectacular de la infraestructura de producción energética (hidrotermia, hidrocarburos), la que ha provocado la expropiación de tierras agrícolas y el deterioro ambiental de vastos espacios dedicados a satisfacer las necesidades alimenticias de las comunidades pobres en la entidad.

- La extensión de la agricultura comercial de exportación (principalmente café) en detrimento de la producción de básicos (maíz y frijol), mayormente en beneficio del sector privado.

- El auge de la explotación ganadera en tierras tradicionalmente dedicadas a la agricultura y la expoliación de miles de hectáreas de minifundios en beneficio del sector ganadero privado.

- La acentuada explotación de maderas preciosas del ámbito selvático y la consecutiva ganaderización de las áreas desforestadas, que ha propiciado el deterioro ecológico de vastas regiones solicitadas por colonos desplazados de sus anteriores comunidades, a raíz de los procesos antes mencionados. Resulta de estos procesos que la riqueza proporcionada por las actividades industriales y agropecuarias en el estado no favorecen más que muy secundariamente y de forma relativa al sector campesino pobre y se canaliza más bien hacia el exterior de la entidad (energía eléctrica, petróleo, ganado, café, maderas preciosas); los promotores y beneficiarios del proceso de extracción-producción-acumulación son en gran medida los miembros de la oligarquía agropecuaria tradicional; y las víctimas del desarrollo económico desigual, los campesinos indígenas y mestizos que conforman la abrumadora mayoría de la población económicamente activa del estado. Ante la degradación progresiva de sus formas y medios tradicionales de reproducción, los integrantes de las comunidades afectadas por los fenómenos antes mencionados han generado varios tipos de respuestas en forma de acciones sociales repentinamente muy violentas; las que han sido sistemáticamente reprimidas por los agentes del gobierno estatal. Pro-

gresivamente han ido diseñando nuevas alternativas de lucha y resistencia mediante formas de organización partidaria, corporativa o sindical, tratando de establecer un diálogo con el sector oficial o negándose a ello, según los casos, en la búsqueda de soluciones favorables y duraderas.

2.3 Características sociales del estado

Chiapas es un estado predominantemente rural y, si bien se ha notado en los últimos 20 años un incremento de los sectores industriales y de servicios que provoca una disminución de la población activa del sector primario, las cifras registradas en 1980 enfatizan la predominancia de las actividades agropecuarias.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA

Sectores	1960	1970	1980
agropecuario	81.2	72.8	72.0
industrial	7.1	7.5	9.0
de servicios	11.7	14.5	14.9
no especificado	00	5.2	4.1

(FUENTE: SARH, *op. cit.*, cuadro 9, p. 92.)

Sin embargo, el producto interno bruto estatal es generado mayormente por los sectores secundario y terciario, que producen el 58.6% del total acumulado.¹⁴ Resulta entonces que la población rural mayoritaria es minoritariamente beneficiada por la riqueza generada en el estado; un análisis de los recursos acumulados por concepto de la venta de productos canalizados en el mercado (café, ganado, madera, algodón, cacao, plátano, etcétera) daría cuenta de la capitalización desigual de los beneficios en manos de una minoría de grandes productores y en detrimento de la gran mayoría de los minifundistas, ejidatarios y comuneros.

A pesar de producir la tercera parte de la energía eléctrica consumida en el país, la cuarta parte de la producción de hidrocarburos y la quinta parte del ganado consumido a nivel nacional, a pesar de proporcionar más de la mitad de la producción nacional de café, Chiapas es uno de los

¹⁴ *Ibid.*, cuadro 1.

tres estados más pobres de México, con un producto *per cápita* casi tres veces inferior al promedio nacional.¹⁵ Las comunidades rurales carecen en su mayoría de servicios de infraestructura comunitaria y están todavía mal comunicadas (particularmente en el sureste del estado). Las condiciones de salud son extremadamente precarias, lo cual explica que los índices de morbilidad sean muy altos, en razón de enfermedades endémicas características de las zonas tropicales húmedas tales como el paludismo, las enfermedades del aparato digestivo, parasitosis diversas, tifoideas, tuberculosis, oncocercosis, etcétera. La alimentación es asimismo deficiente e inclusive alcanza niveles críticos en las áreas rurales. La falta de electrificación y de agua potable, no deja de sorprender, tratándose de un estado que abastece cuantiosamente al país de energía hidroeléctrica.

A pesar de los esfuerzos del sector público para extender los servicios educativos a zonas marginadas y comunidades aisladas, la población chiapaneca reproduce todavía altos índices de analfabetismo (43% en 1980).¹⁶

La población rural se compone en mayor proporción de indígenas de varios grupos étnicos mayances (tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames, mochos, lacandones, chujes, jacaltecos), así como de zoques y de refugiados indígenas guatemaltecos establecidos a lo largo de la zona fronteriza.

2.4. *Algunos antecedentes históricos*

El pasado de Chiapas consiste en una larga historia conflictiva impregnada de hostilidad y de violencia clasista e interétnica que no podemos explicar sin penetrar más a fondo en las raíces históricas de su actual movilización. Desde los siglos de la colonia (que se inició en 1524), los campesinos indígenas de Chiapas se levantaron en armas en contra de un sistema de explotación que, conforme pasaban los años, se volvía más intenso, sofisticado, complejo y eficaz.

Levantaron primero la bandera de la lucha interétnica que frecuentemente los cronistas calificaron de guerra de castas (1867-1870); intentaron luego aliarse a las causas que les parecieron más aptas para defender sus derechos de trabajadores y de seres humanos ligados a una cultura particular, donde predominaba la conciencia de participación colectiva en la reproducción social. Así fue como, en pleno conflicto revolucionario, se dejaron engañar por sus finqueros bajo una supuesta dirección maderista (la Rebelión de Pajarito, en 1911). Ajenos a los postulados reformistas carrancistas, siguieron luchando a contra corriente histórica, en contra de Carranza y de la Constitución de 1917, para que sus extorsionadores siguieran gozando de los privilegios atávicos que reproducían en detri-

¹⁵ En 1977 se estimaba en 9 600 pesos el producto per cápita en Chiapas, en tanto que alcanzaba 2 500 el promedio nacional, SARH, *op. cit.*, p. 105.

¹⁶ *Proceso*, 13 de junio de 1983.

mento del campesinado avasallado (el movimiento mapachista de 1914 a 1920).

Al pasar de las décadas, el ostracismo característico de las comunidades campesinas, mantenido férreamente por los caciques, finqueros, terratenientes y latifundistas de Chiapas, llegó a ser permeado por las organizaciones políticas que irrumpieron en el marco conservador de la política estatal; se empezaron a diseñar nuevas formas de organización intra e intercomunitaria, se formularon nuevos reclamos, manifestaciones de repudio y de inconformidad, deseos de cambio y de reformas sociales, políticas, económicas y agrarias.

Al amanecer del cardenismo, Chiapas despertaba repentinamente de su letargo consuetudinario, al arrebatarse los campesinos a sus amos el privilegio de decidir por ellos, actuar en contra de ellos y reproducirse a costa de ellos.

Es un largo proceso de identificación del campesinado chiapaneco como luchador social el que lleva hoy en día a los indígenas tzeltales o tzotziles, a los pequeños productores costeños, a los jornaleros cafetaleros, a los aparceros, los medieros y a los peones acasillados tojolabales, choles o mames a reivindicar un cambio profundo de estructuras, a medida que el desarrollo del capitalismo en el estado, introduciendo nuevas formas de explotación, hacía resaltar las hondas contradicciones sociales existentes e inducía a la base campesina a exigir cambios profundos en las relaciones sociales de producción.¹⁷

3. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

3.1. *La lucha por la tierra en los municipios fronterizos*

La movilización reciente de las comunidades meridionales responde principalmente a reclamos de tipo agrario. Cabe mencionar que los miembros más destacados de la oligarquía regional proceden precisamente de dicha zona y, entre ellos, el actual gobernador de la entidad. La presión campesina se efectúa en busca de la regularización de trámites o litigios agrarios pendientes desde hace varias décadas y pretende asimismo lograr la ejecución de dotaciones presidenciales ya otorgadas. Los municipios más afectados por este tipo de irregularidades son Comitán, Las Margaritas, Trinitaria e Independencia. La zona tojolabal se caracterizó por ser totalmente fraccionada durante la segunda mitad del siglo XIX y comprada por familias chiapanecas que instalaron ahí grandes fincas cafetaleras. A diferencia de otras zonas del estado en las que los campesinos indígenas lograron mantenerse precariamente en tierras comunales bajo la "protección" de los frailes (en las reducciones coloniales) y luego de sus "protectores" lascasenses (quienes usaban su fuerza de trabajo) sin disponer

¹⁷ Marie-Odile Marion, *El agrarismo en Chiapas*, en prensa, INAH, México.

de sus predios, los tojolabales fueron en épocas tempranas expoliados y (o) dispersos por las comarcas selváticas cercanas. El hecho es que no se logra un consenso respecto al asentamiento tojolabal en los siglos xvii y xviii¹⁸ y que, a mitad del siglo pasado, los tojolabales pasaron a ser peones acasillados y miembros de la servidumbre de los finqueros que se adueñaron de la región.

El reparto agrario fue "sumamente irregular; mientras que algunas colonias como Jotaná obtuvieron el total del latifundio de donde surgieron (más de 3 400 has.); otras, como Allende no recibieron más de 300 has. apropiadas, en su mayor parte, para la silvicultura y no para actividades agrícolas".¹⁹

La repartición solía hacerse entregando tierras improductivas o de baja rentabilidad en cantidad insuficiente, sin considerar que la dinámica del crecimiento poblacional haría obsoleta dicha dotación en los pocos años posteriores a su ejecución. Para lograr liberarse del peonaje acasillado, los tojolabales que no alcanzaban a vivir de sus predios ejidales tuvieron que buscar en la selva la solución a su problema. Colonizaron tierras nacionales del municipio de Altamirano, de donde muchos regresaron acosados por el cambio de clima y de medio ecológico y por la incapacidad de lograr adaptarse a esas nuevas condiciones de vida. Fue el caso de Santa Margarita de Agua Azul, que logró conseguir en 1970 una dotación ejidal de 1 455 has. de tierras selváticas, después de que migraron ejidatarios de Veracruz en busca de posibilidades de sustento. El ejido de Veracruz es probablemente el caso que mejor ejemplifica la problemática agraria de la zona tojolabal y explica la violencia incontenible que cobra año tras año su saldo de víctimas en el sur del estado. Los 78 miembros del ejido Veracruz fueron dotados de 782 has. de tierra de poca productividad que pronto demostraron ser insuficientes para asegurar la reproducción económica de la colectividad. A pesar de que el éxodo de jóvenes hacia la selva representara un cierto alivio para la comunidad, la tierra seguía siendo insuficiente. En 1956 se hizo una solicitud de ampliación a la Secretaría de la Reforma Agraria, para lograr la afectación de la finca Nicaragua (parte de la hacienda San Mateo). "La finca San Mateo obtuvo su certificado de inafectabilidad en 1958, dos años después de la solicitud de los veracruzanos y a pesar de que casi todas las inspecciones agrarias han emitido un fallo favorable a los indígenas, basándose en que en las 2 092 has. que la finca retuvo bajo el rubro de 'ganadera' no hay más de 160 cabezas de ganado (que pertenecen a tres distintos propietarios) y de que no cumple con las otras estipulaciones que marca la ley, el expediente y con él la petición, como es costumbre, han sido archivados."²⁰ Los tojolabales solicitaban un predio irrigable; la SRA les propuso en cam-

¹⁸ Mario Ruz, *Los legítimos hombres*, Centro de Estudios Mayas de la UNAM, México, 1981, vol. I, pp. 43-48.

¹⁹ *Ibid.*, vol. 2, p. 87.

²⁰ *Ibid.*, vol. 2, pp. 9-92.

bio una finca (Kistula, de la misma hacienda) de calidad inferior y en parte cerril. Se negaron a aceptar el trato. Una comunidad vecina, Lomantan, aprovechó entonces la oportunidad para solicitarla. Se iniciaron entonces los trámites de afectación de Kistula en favor de Lomantan. Cuando los ejidatarios de Veracruz se percataron de lo que se estaba preparando, invadieron el predio que habían rechazado años atrás, desvirtuando así el trasfondo del problema hacia un conflicto intercomunitario e intragrupal. Una parte importante de los ejidatarios de Veracruz (80%) habían sido conversos por los Testigos de Jehová; cuando se suscitó el conflicto, solicitaron la intervención del gobierno estatal, que a su vez, mandó al ejército para que resolviera el problema, logrando la evacuación de la finca invadida y su consecuente recuperación de parte del finquero. Desde aquella fecha, se ha paralizado todo intento de afectación agraria en la finca San Mateo.

La organización tojolabal había sido fuertemente debilitada, algunos años atrás, por una profunda escisión que fue incrementándose en el transcurso de los años 80 hasta provocar una ruptura entre las comunidades miembros. En 1974, a raíz del congreso indígena,²¹ se creó la Unión Lucha Campesina, casi esencialmente conformada por comunidades tojolabales. Esa unión de ejidos se integró en 1977 a la Unión de Uniones.²² En 1980, se suscitó sin embargo una divergencia entre varias comunidades, cuando parte de los ejidos integrantes aceptaron el nombramiento de un nuevo consejo directivo que planteaba un acercamiento a la CNC. La otra parte de la Unión Tojolabal se negó a aceptar la nueva tendencia y enfatizó su deseo de mantener una postura independiente, acercándose en cambio a la CIOAC. Se produjo entonces una ruptura dentro de la Unión Lucha Campesina: los ejidos del sur quedaron integrados a la Unión de Uniones, mientras los del norte se retiraban de la Unión Lucha Campesina; y en 1985 formarían la Unión de los Pueblos Tojolabales. La CIOAC jugó un papel fundamental en la vida política de esos ejidos. En 1983 logró que el presidente del Consejo Supremo Tojolabal fuera uno de sus miembros, provocando así que dicho consejo escapara durante tres años al control de la CNC. En 1983 se abrió en Comitán la sucursal 21 de la UNCAFÆCSA ²³ (órgano de crédito promovido por la CIOAC) que inició sus actividades de organización productiva entre varios ejidos de la Unión Tierra y Libertad y algunos de la Unión de los Pueblos Tojolabales. El gerente de dicha sucursal, Andulio Gálvez, quien fuera también asesor jurídico de la CIOAC en el estado, era un joven abogado chiapaneco. El desarrollo de las actividades de la CIOAC y de la UNCAFÆCSA en esa parte del estado provocó el endurecimiento de las facciones en pugna; si bien los miembros de la Unión Lucha Campesina no se

²¹ Ver sección 3.6.

²² *Ibidem.*

²³ Unión Nacional de Crédito Agropecuario, Forestal y Agroindustrial para Ejidatarios, Comuneros y Pequeños Propietarios Minifundistas, S. A. de C. V.

afiliaron a la CNC, reproducían una tendencia manifiestamente más favorable hacia los agentes, programas y en general la política del Estado. Los ejidos que se afiliaron a la CIOAC eran en cambio más combativos y poco dispuestos a dejarse permear o mediatizar por las ofensivas y consignas oficiales. Se ensanchó entonces la zanja, separando a ambas facciones de la misma organización inicial. Un litigio agrario opuso en 1984 a varios campesinos de la CIOAC con un miembro de la familia Castellanos Domínguez,²⁴ obligando entonces al gobierno estatal a intervenir. En noviembre de 1985, el licenciado Gálvez fue asesinado por un pistolero a sueldo del hermano del gobernador. Un miembro de la Unión Lucha Campesina (a su vez miembro del consejo de la Unión de Uniones) fue acusado de participar en el atentado (y en dos anteriores dirigidos contra los principales líderes de la CIOAC en Comitán, en los que murió uno de ellos). Declarado culpable de complicidad de homicidio fue condenado a 18 años de reclusión criminal. La muerte de Andulio Gálvez y los constantes atentados de los que son víctimas los militantes de la CIOAC provocaron una cristalización del conflicto en torno a un enfrentamiento CNC-CIOAC, obviamente promovido por los agentes del gobierno estatal, preocupados en seguir dividiendo el movimiento tojolabal para que deje de amenazar los fuertes intereses que ciertas familias de la oligarquía terrateniente pretenden conservar en los municipios tojolabales.

3.2. La lucha por la sindicalización de los jornaleros en los municipios septentrionales

En los municipios del norte del estado, la polarización socioeconómica ha provocado durante los últimos 15 años una serie de estallidos de violencia de inusitada magnitud. Cabe mencionar que la zona ha sido acaparada por los finqueros cafetaleros y ganaderos y que la mayor parte de la población indígena involucrada en el proceso de producción son peones acasillados.

Los primeros movimientos de importancia se dieron en 1975, en el municipio de Simojovel, en donde varias haciendas fueron invadidas por solicitantes de tierra, los que fueron reprimidos 18 meses después, con suma violencia, por una operación concertada entre las milicias contra-insurgentes del estado y el ejército federal. Un año después, los primeros promotores de la CIOAC intervenían en el municipio, estableciendo contacto con los peones acasillados de las fincas y pretendiendo organizar un sindicato independiente de jornaleros agrícolas, con el fin de lograr el establecimiento de contratos laborales entre éstos y los finqueros y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los trabajadores agrícolas. La represión en contra de los militantes de la CIOAC se inició entonces con

²⁴ Ernesto Castellanos D., hermano del actual gobernador de Chiapas.

medidas intimidatorias, órdenes de aprehensión, incendios de pueblos, asesinatos, etcétera. No nos extenderemos más sobre los matices peculiares que toma la represión en esa parte del estado,²⁵ cabría simplemente destacar la perfecta coordinación que existe entre finqueros y miembros de la burocracia política y policiaca estatal para llevarla a cabo. Las relaciones de poder se establecen en la "gran familia chiapaneca" de los terratenientes mediante complejos y sutiles sistemas de alianza que tienen como objetivo reproducir los privilegios atávicos que los miembros de la oligarquía regional mantienen sobre sus trabajadores y asegurar así la estabilidad de un orden social que el cambio histórico pretende precisamente contradecir. La transformación del estado se ha dado en las últimas décadas de manera aparentemente inadvertida por los descendientes de las grandes familias chiapanecas. Sin embargo, la creación, mediante los programas de PRODESCH,²⁶ de una infraestructura extensa de transporte y comunicación; el acelerado proceso de proletarianización de grandes contingentes de trabajadores asalariados en las plantas hidrotérmicas y en la industria de extracción petrolera; el desarrollo progresivo del comercio y demás actividades del sector terciario; la participación constante y organizada de los campesinos en la contienda agraria; las nuevas fórmulas de presión política o sindical propuestas al sector rural por la mayor interacción de los partidos de oposición o las organizaciones independientes; todo ello ha propiciado un cambio radical e irreversible de las relaciones sociales de producción, dentro de la formación socioeconómica regional, en los últimos veinte años. Este cambio parece, sin embargo, ser ignorado por el sector de la burguesía agraria regional al seguir reproduciendo esas mismas aberraciones que le permitieron establecer en el pasado un dominio absoluto sobre el proceso de acumulación.

En los municipios septentrionales, los intentos hechos por los peones para sindicalizarse independientemente de los canales previstos a tal efecto por el sistema político se enfrentaron a la negación rotunda del sector público a legitimar su proyecto, así como a la indiferencia de los finqueros para dar respuestas a sus demandas. Se incrementó el malestar social a raíz del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, consistente en construir una presa en Itzantún, cuyo embalse inundaría gran parte de las fincas cafetaleras del municipio de Huitiupan. Las medidas de indemnización no favorecían más que a los finqueros y para los peones tzotziles se preveía solamente la venta de copropiedades. El rechazo de los trabajadores acasillados a tal propuesta provocó la cristalización de un conflicto fuerte que fue ventilado a fines de 1983, mediante la marcha campesina a Tuxtla Gutiérrez y a la ciudad de México. Las largas sesiones de negociación que siguieron durante una semana a la movilización campesina no lograron sin embargo resolver la problemática de los jornaleros tzotziles, ni tampoco

²⁵ Al respecto consultar: M. O. Marion, *El movimiento campesino en Chiapas (1983)*, CEHAM, México, 1984.

²⁶ Programa de Desarrollo Económico y Social de Chiapas.

encontrar una solución aceptable para el reacomodo de las miles de familias amenazadas de desalojo. En cambio, las represalias policiacas se han incrementado considerablemente y demuestran la notable incapacidad del Estado para imponerse como gestor y negociador en un conflicto que escapa por completo de su control; así como la terca convicción de los campesinos que no abandonarán la contienda hasta no haber logrado siquiera el derecho de reproducirse decentemente.

3.3. *La recuperación de las tierras expropiadas: Venustiano Carranza y la OCEZ*²⁷

La construcción de represas en el sistema hidrológico del río Grijalva por la Comisión Federal de Electricidad a partir de 1959 vino a agravar la problemática campesina en cuanto a la pérdida de sus recursos productivos. La comunidad de Venustiano Carranza es indudablemente (al lado del municipio de Huitiupan) la que mejor ilustra las formas que tomó el enfrentamiento entre campesinos desposeídos y el Estado, a raíz de la extensión de los proyectos hidrotérmicos. Pero, a diferencia de los peones acasillados de Simojovel, Bochil o Huitiupan, que no tenían acceso a la tierra desde más de un siglo atrás, los campesinos acasillados de la depresión central y de la Fraylesca habían logrado preservar parte de su patrimonio territorial y en muchos casos (como en el de Venustiano Carranza) luchaban precisamente para recuperar los predios que les habían sido arrebatados por los terratenientes regionales y cuya legítima pertenencia estaban en posibilidad de comprobar. La comunidad tzotzil de Venustiano Carranza (anteriormente San Bartolomé de los Llanos) tenían títulos virreinales por más de 70 mil has. Las mejores tierras del fondo comunal pasaron poco a poco a manos de particulares y cuando se logró, en 1974, la restitución del patrimonio territorial colectivo, tan sólo 5 000 has. pudieron ser entregadas a los 700 comuneros de Carranza; varios de los beneficiarios potenciales de la resolución presidencial tuvieron que seguir alquilando tierras en el Valle Central para lograr sobrevivir. Los campesinos tzotziles emprendieron una larga y costosa (en vidas humanas) lucha para lograr la restitución siquiera parcial de sus bienes. Varios de sus dirigentes fueron encarcelados, torturados y asesinados. El conflicto llegó a su clímax, cuando, a raíz de la construcción de la represa de la Angostura, la comunidad perdió 2 545 has. de tierras de cultivo. Si bien la CFE indemnizó parcialmente a la comunidad, no restituyó tierras; y por otra parte, la SRA no aceleraba sus mecanismos de afectación de los latifundios instalados sobre las tierras expoliadas a la comunidad. La presión sobre la tierra se incrementó entonces considerablemente y los campesinos llevaron a cabo una serie de acciones críticas con el objetivo de recuperar por la fuerza lo que el gobierno se negaba a entregar tras múltiples negociaciones. La represión de 1977

²⁷ Organización Campesina Emiliano Zapata.

fue encargada al ejército; varios hombres murieron de ambos lados; la movilización de Carranza entraba en una nueva fase tanto de acción como de expresión.

Para lograr controlar el movimiento, el gobierno estatal llevó a cabo la misma política que lo llevaría ulteriormente a provocar la división del grupo tojolabal: cooptó a un líder y creó, dentro del grupo movilizado, una fracción disidente (en este caso los "coras", también conocidos como los "traidores"). Los resultados no fueron los deseados, en el sentido de que no se logró el debilitamiento del movimiento, sino que por lo contrario, su fortalecimiento y radicalización a raíz de la fuerte represión que cayó insistentemente sobre los integrantes de la "Casa del Pueblo"²⁸ obligó a los comuneros a diseñar nuevas estrategias de interacción con otros grupos movilizados de los alrededores (Pujilic, Villa de las Rosas, Socoltenango), así como nuevas organizaciones independientes que los ayudarían a ventilar su problemática en foros campesinos regionales o nacionales. Así es como, después de haber sido parte de la Unión de Uniones, la organización de comuneros de Carranza se afilió a la CNPA en 1981 y posteriormente integró la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), recalcando sus manifiestos orígenes agraristas. Al vincularse con otras organizaciones campesinas en lucha, participaron en una serie de acciones críticas que resultaban ser nuevos métodos de expresión después de las invasiones, del corte de cercas o del bloqueo armado de caminos de acceso a las fincas; participaron en huelgas de hambre, en marchas, mítines, plantones; elaboraron denuncias y declaraciones en la prensa, en fin, modernizaron su acervo de recursos y estrategias de lucha, al conformar la Coordinadora Campesina Provisional de Chiapas y del Ejido Venustiano Carranza (ССРН), afiliada a la CNPA.

"El movimiento campesino de Venustiano Carranza que nació de un reclamo de tierras y de un enfrentamiento de corte tradicional con el grupo terrateniente local, se convirtió al pasar de los años —al no recibir atención suficiente de parte del sector oficial encargado de solucionar su problema—, en un movimiento político de denuncia de las estructuras de control político rural.

"La falta de modernización de dichas estructuras políticas tradicionales —en este caso orquestado por la central campesina oficial— aunada a una manifiesta deficiencia del aparato burocrático agrario, condujeron a la base campesina a instrumentar nuevas alternativas de lucha, con base en su organización comunitaria tradicional.

"Como en el caso de la zona septentrional, el fenómeno fue propiciado por la extensión del proyecto de infraestructura hidráulica del Estado, el cual, al no ser debidamente planificado en cuanto a sus repercusiones socio-productivas, resultó sumamente expoliador para una comunidad campesina, de por sí extremadamente amenazada en sus posibilidades de explotación

²⁸ Ver M. O. Marion, *op. cit.*, 1984, pp. 51-53.

agrícola; asimismo, resultó determinante la constante penetración de nuevas formas de organización independiente; en este caso el catalizador de la aglutinación fue la Cordinadora Plan de Ayala, que permitió vincular las reivindicaciones agrarias y políticas de los comuneros de Venustiano Carranza con otros focos de conflicto agrario, tanto del estado de Chiapas como de otros estados de la República; integrando así el proyecto campesino de Carranza al foro amplio de demandas y denuncias orquestado por la CNPA en el ámbito del agrarismo mexicano independiente.”²⁹

3.4. *La lucha contra los caciques de los Altos de Chiapas*

De todos los movimientos campesinos registrados en Chiapas, las luchas intracomunitarias que surgen con cierta periodicidad en los municipios alteños son probablemente los más arcaicos, a la vez que los más costosos, tanto en vidas humanas como en desgaste material. Son también el resultado de un repentino desajuste entre la dinámica social que impulsa a las bases populares a cuestionar las estructuras de poder y el proyecto de las autoridades municipales que se justifica precisamente mediante la reproducción rigurosa de ese mismo aparato de sugestión y control.

Este tipo de conflictos se localiza mayormente en las tierras altas del centro del estado, en los municipios tzotziles y tzeltales de Chamula, Tenjapa, Larrainzar y Chalchihuitan entre otros.

Desde hace unos 15 años, los no indígenas que aseguraban la reproducción de las instancias político-administrativas en dichos centros de población, a la vez que controlaban la entrada de mercancías de primera necesidad y el flujo de productos agrícolas hacia los mercados regionales, progresivamente han dejado su lugar a miembros de la comunidad indígena que les fueron sustituyendo tanto en las alcaldías como en las tiendas más importantes de las cabeceras y de los parajes de su jurisdicción. Aprovechando el sensible mejoramiento de las vías de comunicación, invirtieron en vehículos y almacenes, con el fin de capitalizar la producción agropecuaria local y distribuir, en circuitos por ellos instrumentados, los bienes necesarios para la reproducción de las comunidades. Al mismo tiempo, recuperaban los puestos dejados vacantes por los mestizos en la administración, como alcaldes, magistrados, regidores, etcétera. Eran asimismo personajes de la jerarquía indígena tradicional que integraban los puestos más altos al interior de las mayordomías y podían por lo tanto acumular funciones político-administrativas, económicas y religiosas. Su conocimiento del idioma y de las costumbres indígenas se complementaban con un adecuado manejo del español, puesto que muchos de ellos fueron inclusive formados tiempo atrás en los programas de educación, capacitación y adiestramiento “bi-língüe, - bi-cultural” propiciados por la Secretaría de Educación Pública. Esos nuevos “dignatarios” indígenas eran excelentes interlocutores

²⁹ *Ibid.*, p. 55.

del gobierno estatal, cuyo proyecto retomaban en el sentido de mantener el *statu quo* socioeconómico en las comunidades donde intervenían, propiciando pequeñas reformas sin consecuencias y evitando que surgieran acciones modernizantes que amenazarían el transcurso de las actividades políticas planeadas desde Tuxtla Gutiérrez. Las comunidades de los Altos proporcionaban mano de obra barata y [otro] dócil a los cacicutores del Soconusco y a los proyectos de construcción que, durante varios años, se multiplicaron en el estado. Se consideraba entonces a dicha región como una reserva de fuerza laboral no especializada, susceptible de ser contratada esporádicamente y devuelta sin mayor compromiso a sus parajes de origen al terminarse el contrato laboral.

Por otra parte, la "burguesía indígena emergente" propiciaba el consumo de alcohol y otros bienes suntuarios relacionados con la reproducción de las festividades rituales autóctonas, e inclusive se había adueñado de las destilerías, de las fábricas de velas, del comercio del incienso, etcétera, con el fin de velar por el mantenimiento de las costumbres en sus más atávicas expresiones, puesto que mediante ellas seguían legitimando su poder de acumulación.

Los adversarios inmediatos de dichos personajes eran los jóvenes que regresaban de la ciudad (después de estudiar primaria o secundaria) o de los centros de trabajo asalariado y planteaban nuevas alternativas de participación en su comunidad de origen, cuestionando asimismo la legitimidad de los fundamentos del aparato de poder. Las ideas progresistas ventiladas en las fincas, en las obras o en las calles de San Cristóbal, Comitán o Tapachula, permearon de esta manera a las nuevas generaciones de trabajadores y campesinos tzotziles que iniciaron un proceso de demistificación de las estrategias institucionalizadas de control social. Por otra parte, la penetración de los predicadores evangelistas (de diversas sectas) en los parajes indígenas de los Altos significó una nueva amenaza para los grupos instalados en las cabeceras municipales. Esos nuevos conversos se negaban a consumir alcohol, a comprar bienes suntuarios y a derrochar excedentes en los negocios establecidos precisamente para dicho fin. Se abstentían de participar en las celebraciones tradicionales, y de aceptar cargos (onerosos) en las mayordomías de los santos tutelares; por lo tanto, proporcionaban a los demás integrantes de sus comunidades el ejemplo del cisma, de la ruptura, en otros términos, del rechazo a la tradición, del cambio modernizante y de la desestabilización.

En una comunidad (Tzajalchen), los campesinos iniciaron una cooperativa de consumo, pretendiendo así escapar a los circuitos de distribución mercantil establecidos en todo el municipio por el propio alcalde, quien, al monopolizar el abasto, imponía los precios y las mercancías sin ningún temor a la competencia.

En otra comunidad (Tzacucum), los ejidatarios se negaron a seguir pagando cuotas arbitrariamente colectadas por la administración municipal de Chalchihuitan e intentaron inclusive sustraerse legalmente del poder

despótico del alcalde, solicitando la anexión de su comunidad al vecino municipio del Bosque.

En Chamula, Chenalho y otros municipios de los alrededores, los **protestantes fueron satanizados por su rebeldía, sus herejías y "desviacionismos"**. En todos los casos se incendiaron parajes, cultivos, tiendas; los campesinos acusados fueron asesinados (algunos fueron quemados vivos como en los años de la Santa Inquisición); otros fueron torturados, vejados públicamente. Todos fueron condenados a emigrar fuera de sus respectivos municipios, acosados por huestes enfurecidas por las exhortaciones de sus magistrados. Miles de familias buscaron refugio en el bosque, en la selva y en San Cristóbal; muchos fueron a crear nuevos centros de población lejos de sus lugares de origen, obligados a abandonar tras de sí sus pocas pertenencias, sus tierras, sus hogares, los que eran evidentemente recuperados por los autores intelectuales de la represión y del saqueo. Esos diversos casos proporcionaron el ejemplo lamentable del deterioro de las condiciones de reproducción sociopolítica de las comunidades indígenas del centro de Chiapas; hacen claramente resaltar que es en la parte económicamente más atrasada del estado, donde se dan los fenómenos sociales más arcaicos.

Todo parece indicar que la administración política estatal "concedió" a los caciques indígenas remanentes de la formación social, la oportunidad de afirmarse como notables con base en el control económico de su municipio, creando artificialmente unas aparentes "reservas indígenas"³⁰ en donde impera el derecho costumbrista. Con base en dicho orden social, todas las exacciones están permitidas siempre y cuando se den en contra de quienes cuestionan el sistema y demandan o impulsan proyectos modernizantes.

Las luchas campesinas que se desatan en dicho ámbito tienen orígenes diversos, pero siempre pugnan por una modernización de las relaciones de intercambio (productivo, mercantil, laboral, etcétera); y, si bien toman el aspecto de luchas por el control de los bienes de producción y de los canales de distribución, son arbitrariamente disfrazadas de luchas ideológicas (religión, tradición, costumbres). El poder regional "encarga" entonces a sus representantes incondicionales (los notables) la tarea de restablecer el *statu quo*, apartando a los quejosos y erradicando así la amenaza de desestabilización. Es como si se negara a los Altos de Chiapas la alternativa del desarrollo histórico y se reconociera implícitamente la imposibilidad de encauzar dicha región hacia la modernización de sus estructuras económicas en el marco de la producción agropecuaria.

Cabe mencionar que dicha actitud de la élite dirigente chiapaneca, que consiste en dejar cierta autonomía a los caciques indígenas en el control del orden social, no se repite en los valles del Grijalva, en el Soconusco, en la franja costera y en general en las zonas de alta producción de exportación, en donde las luchas reivindicativas emanadas de las bases campesinas

³⁰ Henri Favre, "Changement culturel et Nouvel Indigenisme au Mexique", *Document N° 20*, ERSIPAL, París, 1981, p. 42.

(en reclamo de tierras o de modernización de las relaciones laborales) son sistemáticamente reprimidas mediante la utilización de los cuerpos de seguridad pública.

“A diferencia del Soconusco, centro de desarrollo capitalista, en donde el *statu quo* debe ser mantenido a todo costo, los Altos, desprovistos de interés estratégico y de valor económico para el capitalismo, pueden ser abandonados sin mayor inconveniente a las bocas inútiles y a los brazos inexplotables que son hoy día los indios.”³¹

Chiapas resulta ser un modelo de “desarrollo separado”,³² en donde, por una parte, las regiones de alta producción agropecuaria (destinadas mayormente a la exportación) son favorecidas por programas de inversiones públicas y son extremadamente vigiladas para que ningún brote de reivindicación campesina llegue a entorpecer el fenómeno de acumulación capitalista; y, por otra parte, las regiones de baja productividad, o de cultivos de sobrevivencia, que no ofrecen ningún interés particular en el marco del desarrollo capitalista, son abandonadas en su letargo consuetudinario, bajo la férula de una emergente burguesía india, que reproduce el papel dual de guardián de las tradiciones y gendarme del sistema.

Si bien los movimientos campesinos que surgen en las diversas regiones del estado presentan características distintivas y, según la forma en la cual se expresan, parecen ser de orden agrario, laboral o étnico, de hecho resulta que todos se originan en un mismo fenómeno de cuestionamiento de un desarrollo desigual, en el que incide una deficiente planeación, tanto a nivel estatal como federal.

Todos tienen ciertas características comunes: reclamo de tierras; denuncia del aparato de control caciquil (en todas sus modalidades); búsqueda de alternativas modernizantes (cooperativas de producción, sindicalización independiente), etcétera. Si bien en su origen pueden ser luchas agrarias en las que el control de la tierra está en cuestión, trascienden tal etapa y se vuelven movimientos sociales con fuertes demandas de tipo político que terminan cuestionando la estructura administrativo-política oficial que prevalece en el estado. Lo cual explica que el último recurso resulte ser la solicitud de arbitraje de las instancias federales ante lo que consideran como la expresión del despotismo de la máxima autoridad regional: el gobernador.

Los movimientos campesinos que lograron una mayor organización tras su filiación partidaria o gremial a un órgano político-sindical de difusión nacional tienen acceso a este último recurso. No así los movimientos más pequeños, que por su aparente intrascendencia política no han llamado la atención de las organizaciones independientes (o no han sabido recurrir a ellas). Quedan condenados a la esterilidad y permiten en cambio una reafirmación de los agentes caciquiles encargados de reprimirlos.

Quizás por eso los indígenas tzotziles y tzeltales desterrados de sus res-

³¹ *Ibid.*, p. 42.

³² *Ibid.*, p. 48.

pectivos municipios (Chalchihuitan, Chamula, Chenalhó, Tenejapa, etcétera) intentaron ofrecer mayor resistencia al impacto del cual son las víctimas, integrándose en un "Comité de Defensa de Amenazados, Perseguidos y Expulsados" y buscando en la unificación de problemáticas similares la conformación de un órgano de defensa y representación ante las instancias gubernamentales.³³

3.5. *El enfrentamiento con PEMEX*

En el noroeste del estado, las crecientes actividades de perforación y exploración petrolera han provocado nuevos tipos de conflictos, en que se oponen grupos de campesinos a PEMEX y a las empresas encargadas de llevar a cabo las tareas de explotación de los mantos de hidrocarburos. Si bien en el norte las acciones críticas se han dirigido mayormente hacia Petróleos Mexicanos, en la zona selvática se han desarrollado tanto en contra de los equipos de investigaciones sismológicas contratadas para definir la ubicación y capacidad de los mantos, como en contra de Petróleos Mexicanos, responsable del proceso extractivo. Las formas de presión más usadas consisten en organizar "tapas", o sea, el bloqueo del acceso a los ramales, caminos, brechas o carreteras que conducen a los campamentos, pozos e instalaciones diversas de las distintas empresas. La evolución del conflicto recorrió la siguiente ruta crítica:

1969: Actividades de perforación explorativa.

1972: Descubrimiento de los yacimientos.

1973: Inicio de la explotación.

1976: Intensificación y generalización de las obras de perforación, primeras denuncias y reclamos campesinos.

1977-1985: Generalización del conflicto en la zona norte.

1985-1987: Extensión del conflicto a la zona selvática.

La mayor parte de las actividades extractivas se localizan actualmente en la zona norte, o sea en colindancia con el estado de Tabasco, en tanto que en la zona sur, los equipos de PERFORADATA, GSI³⁴ y PEMEX se encuentran más bien en fases de prospección y perforación exploratoria. El municipio de Reforma es indudablemente el más afectado hasta la fecha por las obras de extracción. En efecto, la multiplicación de los pozos en dicho municipio, así como la construcción del complejo petroquímico de Cactus (municipio de Reforma) ha provocado la expropiación de varios cientos de hectáreas de tierras agrícolas ejidales (y parcialmente minifundios); por otra parte, ha provocado la contaminación de los suelos y aguas y, en general, la degradación cualitativa progresiva del medio ambiente, afectando casas habitación, cosechas, ganado e inclusive seres humanos. Según

³³ M. O. Marion, *op. cit.*, 1984, pp. 67-68.

³⁴ Encargadas esencialmente de investigaciones sismológicas.

un reporte emitido en junio de 1979 por la SARH,³⁵ documentado a su vez por un expediente de PEMEX, los daños ocasionados por el proceso extractivo afectan directamente a 16 ejidos, 10 rancherías, 6 ranchos y 3 colonias agropecuarias; mediante la contaminación de cultivos y pasturas, la enfermedad y la muerte del ganado, la contaminación de aguas e inundación de terrenos por falta de drenajes y alcantarillados, la corrosión de alambrados y de techos de cinc; la emisión de humos, las expropiaciones, los derrames de aguas de desecho; los trazos de líneas, las fugas del pozo Uspi al campo Sitio Grande, la demora en el pago de las indemnizaciones y la destrucción parcial o total de los caminos (por exceso de tránsito de vehículos pesados y a causa de un inadecuado mantenimiento de los mismos por la empresa).

Por lo demás, la misma empresa reconoce haber expropiado 364 has. para la construcción del complejo petroquímico y haber provocado la contaminación de la Laguna Limón (ubicada a un costado de Cactus I), a raíz de lo cual la SARH emitió la siguiente advertencia al respecto: "La degradación de la calidad de las aguas no las hace recomendables para ningún uso humano, ni para abreviar ganado o regar cultivos, ya que se presenta un contenido de residuos de grasas y aceites tan alto que excede los límites señalados por el reglamento en vigor en materia de control de la contaminación de las aguas."³⁶ En distintas muestras, se localizaron de 7.234 a 11.520 miligramos por litro de sólidos totales (incluyendo grasa, aceites y oxígeno disuelto)³⁷ lo cual provocó además que dicha laguna perdiera su potencial pesquero y dejara de ofrecer el menor interés para las poblaciones ribereñas.

Después de mucho reclamar por escrito, a través de comisiones de negociación, los campesinos primero irritados y luego indignados por la tasa de indemnización o la completa ausencia de regularización de sus bienes expropiados o dañados, iniciaron una serie de acciones críticas tendientes a obligar a las autoridades a hacer presión sobre PEMEX, para que cumpliera con sus promesas. Del 18 al 20 de enero de 1981, se formaron las primeras tapas en el Puente Limón, las que se extendieron progresivamente a los puntos estratégicos de acceso, en las principales carreteras de la región; se bloqueó posteriormente el complejo petroquímico, así como los centros de perforación, reparación, mantenimiento, aducción de agua, etcétera, paralizando por completo las actividades de producción de crudo, gas natural y azufre del norte de Chiapas durante 72 horas. Gran parte de los obreros se solidarizaron con los campesinos movilizados y no fue sino después de la intervención personal del gobernador del estado que PEMEX

³⁵ Estudio físico-químico; carta del representante general de la SARH al delegado de la SRA, 27 de junio de 1979, Of. 03393, citado por J. E. Tappan, "Chiapas, economía, política, cultura y sociedad", borrador para discusión.

³⁶ SARH, *op. cit.*, 1979.

³⁷ SARH, *Plan de desarrollo agropecuario y forestal de Chiapas, 1928-1988*, tomo 1, p. 24.

convino en pagar las indemnizaciones sin mayor demora, en contra de la promesa de que los campesinos levantarían inmediatamente sus tapas en toda la región.

En febrero del mismo año se iniciaban los pagos retrasados de 5 o más años, de forma un tanto irracional y desordenada; sin embargo, esta victoria campesina cristalizaría como un ejemplo de procedimientos y sería retomada sistemáticamente tanto en el norte como en el sur de Chiapas en caso de necesidad.

En la zona selvática, el descubrimiento de grandes yacimientos en el año de 1977 fue uno de los motivos para que se "limpiara" la región de todos sus pobladores indígenas, los que, en ese mismo año, fueron concentrados en las comunidades de Velazco Suárez (tzeltales y tzotziles) y Frontera Echeverría (choles). La empresa explotadora CASA, propiedad de Carlos Alemán Arjoan, empezó sus actividades de exploración a partir de 1978, llevando a cabo a tal efecto un importante trabajo de destrucción irracional de recursos forestales en una región clasificada como "selva imperturbada". La progresión constante de las actividades de exploración ha provocado asimismo una serie de conflictos de mediana trascendencia que llevaron a los campesinos de la zona fronteriza (y particularmente los colonos de Quetzalcóatl y de Quiringícharo) a efectuar en 1986 varias tapas organizadas, acompañadas de cierres provisionales de pozos exploratorios, exigiendo la apertura de ramales de acceso a sus comunidades y centros de trabajo, después de que las empresas que ahí laboran tuvieran o bien cerrar el tráfico por lancha en el río Lacantum, entre Boca Lacantum y Pico de Oro, dejando arbitrariamente incomunicadas a decenas de comunidades ribereñas. Ante la emergencia de la problemática social resultante de las acciones desordenadas de dichas compañías y la falta de planeación por parte de PEMEX en sus operaciones en las regiones donde se precisan, se creó en Chiapas la Comisión para el Desarrollo de las Zonas Petroleras del Estado de Chiapas (CODEZPECH), que está a su vez encargada de servir de intermediaria entre las comunidades afectadas, el gobierno estatal y Petróleos Mexicanos, con el objeto de intentar remediar, solucionar o evitar los graves problemas socioeconómicos y políticos que el desarrollo tan espectacular como desordenado de las actividades de exploración-extracción-explotación han generado en la entidad.

Las formas de acción a las que recurren los campesinos afectados por PEMEX en Chiapas han sido con anterioridad usadas por sus vecinos de Tabasco. En realidad, el movimiento orquestado por los integrantes del Pacto Ribereño ha servido de ilustración y de ejemplificación para los chiapanecos quienes, de alguna forma, heredaron las experiencias ajenas en "provecho" propio. Una nueva forma de lucha se está, de tal manera, forjando en el campo mexicano, en tanto que todas las áreas rurales afectadas por el desarrollo tentacular de la petrolificación de la economía buscan, en el intercambio de experiencias y respuestas a un adversario común, la manera de homogeneizar sus criterios de lucha y las modalidades

de acción a emprender y a seguir, desde los valles costeros de Veracruz hasta la selva tropical de Marqués de Comillas.

En esta lucha todavía extremadamente desigual, los campesinos, desplazados, empobrecidos o afectados por la contaminación que produce PEMEX, disponen de un arma de mayor poder que los demás ejidatarios, jornaleros o minifundistas de sus mismos estados. En efecto, tienen a su alcance el recurso de paralizar parcial o totalmente actividades consideradas como prioritarias para la economía nacional y cuya obstaculización significa cuantiosas pérdidas en la contabilidad de quienes se comprometen a desarrollarlas. Asimismo, tienen la opción (aunque supone enfrentarse a mayores riesgos) de amenazar a los equipos e instalaciones muy costosas que requieren las operaciones de PEMEX (puesto que la mayor parte de ellos consisten en equipos importados de tecnología sofisticada); el simple hecho de impedir la entrada del personal de mantenimiento y operación en los locales representa en sí un peligro, tratándose de aparatos que funcionan sin interrupción. Por otra parte, PEMEX no goza en el sureste (donde mayormente actúa) ni en el país en general, de simpatía popular, y su imagen se ha deteriorado grandemente a raíz de la multiplicación de los problemas de contaminación ambiental que su industria ha generado e intensificado. Los campesinos disponen por lo tanto de una vasta audiencia dispuesta a escuchar sus quejas, así como apoyar sus reivindicaciones y acciones críticas; las que se ventilan en todas partes del país mediante los medios masivos de comunicación. La lucha agraria tradicional, por muy dramática que sea, no despierta la misma simpatía en el sector urbano que la movilización social frente al principal promotor de la degradación ambiental que resulta ser PEMEX, y las preocupaciones de orden ecológico han rebasado ampliamente el sector reducido de los intelectuales ambientalistas, hasta permear a todas las capas de población, particularmente en las grandes ciudades, otorgando mayor credibilidad a los esfuerzos de las víctimas rurales del fenómeno petrolero.

3.6. *La Unión de Uniones*

A principios de los años 70 se inició una nueva forma de organización de las comunidades indígenas en el norte y en el centro del estado; fue el resultado de una combinación de factores y esfuerzos que intentaremos esclarecer y analizar. Los promotores del proceso de organización provenían de distintos ámbitos; y trataron en una época de sumar sus esfuerzos para apoyar los proyectos productivos de las comunidades en las que actuaban. Si bien no lograron mantener una línea común de interacción con las comunidades e inclusive tuvieron poco a poco que abandonar la lucha emprendida, los actores sociales que ellos movilizaron de ahí en adelante nunca dejarían de fortalecer los lazos organizativos creados por esas distintas corrientes a lo largo de la década de los años 70. La Unión de Unio-

nes es el resultado de dicha experiencia; estudiaremos en lo sucesivo los principales momentos que propiciaron su formación, los obstáculos que encontraron sus integrantes para lograr sus propósitos y los resultados alcanzados hasta la fecha.

3.6.1. *La obra de la pastoral diocesana: génesis de la Unión*

La diócesis de San Cristóbal se ha caracterizado desde hace más de 25 años por contar con la presencia de un obispo de gran carisma y a la vez de mucha preocupación referente al rol social jugado por la Iglesia. El obispo Samuel Ruiz tuvo un papel fundamental en la difusión en México de los postulados emanados de la corriente ideológica conocida como la teología de la liberación. Fue, durante los años 1969-72, secretario de la Comisión Episcopal Latino Americana (CELA) e hizo de su diócesis una esfera amplia de acción social, vinculando al clero y a los laicos miembros de las comunidades cristianas de base, con las problemáticas (etnoculturales primero y socioeconómicas después) de las comunidades pobres de su zona de influencia pastoral. A partir de los años 60, se fomentó en toda esa región un importante movimiento de catequistas que se comprometieron a acercarse a las comunidades indias, para entender los problemas estructurales que afectaban a la población y asesorarla mediante ciertos programas culturales. Un marista estaba encargado de coordinar las acciones de la escuela catequista de Chiapas, que se extendieron considerablemente desde los pueblos de los Altos hasta las comunidades selváticas, entre 1960 y 1968.

El año de 1968 marcó una etapa importante en la acción pastoral diocesana; en efecto, fue en este año que se llevó a cabo un tipo de congreso en el que se reunieron miembros de varias comunidades indígenas para llevar a cabo un proceso de evaluación de la obra apostólica. Se diseñó en aquel momento el plan "Ach Lecubtesel" que iba a dar una nueva dimensión a la interacción de los catequistas. A partir de 1968, se privilegiaron los programas socioeconómicos propicios para la creación de cooperativas, centros de adiestramiento y capacitación, etcétera, con la ayuda de profesionales (médicos, herreros...). Se crearon pequeños centros de acopio y distribución de bienes de consumo, cooperativas de transporte, talleres comunales, etcétera. Los catequistas eran asesorados por miembros progresistas del clero, maristas, jesuitas, capuchinos... Fue en la zona tojolabal y tzeltal (municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas) donde los programas tuvieron mayor éxito y relevancia. Se desarrollaron tanto en los Altos como en la selva y se conocían como "acciones parajes", mopolizando poco a poco mayores sectores de población.

3.6.2. *El congreso de 1974: la fase de organización*

En el transcurso del año de 1973, el gobierno del estado de Chiapas propuso a la diócesis lascasense la organización de un congreso indígena, con el fin de conmemorar el quinto centenario del natalicio de Fray Bartolomé de las Casas, considerado como el protector de los indios durante la época colonial. El obispo acordó con las autoridades eclesiásticas organizar dicho evento con la participación de las comunidades indias del estado, dando la palabra a sus integrantes para que se expresaran libremente.

Durante un año se reunieron los representantes de los cuatro grupos étnicos más importantes del estado (tzeltales, tzotziles, choles y tojolabales) y se fueron preparando los materiales que iban a ser comentados durante el congreso. Se llevaron a cabo asimismo una serie de reuniones informativas y de sondeo entre las comunidades que acordaron enviar delegados al congreso. Mientras el Estado pretendía organizar "un evento que, sin tocar las estructuras sociales y económicas existentes, pudiera ofrecer la oportunidad de reiterar el discurso de la política indigenista en donde se exaltaba al indio";³⁸ la pastoral diocesana, por su parte, quería encontrar la oportunidad de desarrollar su corriente progresista, que buscaba el fortalecimiento de una Iglesia autóctona, organizando y vinculando cuadros indios y catequistas nativos en busca de nuevas formas de expresión y de exposición de sus expectativas.³⁹

El movimiento originado por ambos sectores iba, sin embargo, a rebasar los planteamientos iniciales del congreso. En efecto, si bien la Iglesia buscaba solamente "despertar las conciencias" e inclusive establecer algunos programas de desarrollo, nunca imaginó que el proceso de movilización irrumpiría en el marco de las estructuras de reproducción socioeconómica para cuestionarlas y, progresivamente, iniciar el proceso de desmantelamiento de los aparatos de sujeción. A raíz del congreso, los indígenas crearían nuevos métodos de alianza, comunicación e interacción, rebasando ampliamente el marco establecido a tal efecto por las instancias gubernamentales y eclesiásticas que los habían invitado a dialogar acerca de sus problemas, carencias, anhelos y aspiraciones.

Los temas esenciales escogidos por las comunidades fueron: la tierra, el comercio, la educación y la salud.⁴⁰ La mayor representatividad fue de los tzeltales y tojolabales, activamente movilizados por los sacerdotes jesuitas

³⁸ Margarita Flores y Arturo León, *Éléments pour l'analyse de l'organisation des paysans producteurs de café. Etude de cas: des communautés indiennes au sud du Mexique*, tesis doctoral, París, 1979, tomo II, p. 367.

³⁹ *Ibid.*, p. 367.

⁴⁰ Una memoria del congreso (que tuvo lugar en octubre de 1974), fue ulteriormente publicada por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); en ella figuran las ponencias presentadas por los delegados indígenas presentes. Un análisis del mismo fue publicado por F. Mestries en *Cultura y Sociedad*, "En Chiapas, primer congreso indígena", pp. 59-68.

y maristas. Los choles participaron aunque en menor grado por haber sido parcialmente disuadidos por los franciscanos.⁴¹ Los tzoltziles fueron los últimos en registrarse y sus delegados fueron los menos numerosos; los caciques indígenas y ladinos de sus respectivas comunidades intervinieron para desalentar su participación.

Durante el congreso que se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre de 1974, se expusieron los principales problemas referentes a los temas seleccionados de los grupos participantes. El foro de expresión democrática que se estableció en dicha ocasión permitió a todos los presentes llegar a la conclusión de que reproducían en mayor o menor grado la misma serie de carencias y aberraciones; y que todos eran, en distinta medida, víctimas de los mismos abusos o sujetos a las mismas exacciones. Al uniformar la problemática de los indios de Chiapas en torno a una serie de condicionantes estructurales, el congreso iba a permitir asimismo la homogeneización de los criterios a seguir para cuestionar el sistema de sujeción e iniciar su desmantelamiento. El consenso se logró finalmente en torno a la unión de los distintos grupos y centros de población presentes o representados. Se propuso la organización de las comunidades para alcanzar objetivos concretos, a pesar de la oposición de las instancias oficiales y de los sectores de control caciquil que no tardarían en manifestarse. La Unión de las comunidades indias que se fraguó durante el congreso se materializaría poco después y se fortalecería paulatinamente en la siguiente década. En efecto, a raíz del congreso se integraron la Unión Quiptic ta Lecubtesel (formada por las comunidades tzeltales), la Unión Lucha Campesina (Tojolabales), la Unión Tierra Tzotzil, la Unión Nueva Generación (comunidades mestizas y tojolabales de la zona selvática), la Unión Tierra y Libertad (comunidades tzeltales, tojolabales y mestizas de la zona selvática), la Unión Chol y otras de la zona de los Valles Centrales como la Unión de Ejidos del Grijalva (Zona de Comalapa) que fue posteriormente recuperada por la OCEZ. A raíz del proceso de organización de los ejidos indígenas, la CNC iba a su vez a promover la creación de uniones ejidales, con el fin de contrarrestar el esfuerzo de penetración de las organizaciones independientes. En efecto la CIOAC a su vez asesoró la conformación de varias uniones en distintas partes del estado, como son la Unión Estrella Roja en el municipio de Independencia, la Unión de Ejidos Yajgachilbe (en G. Leyva Velásquez), la Unión Emiliano Zapata (en la comunidad de Amparo Agua Tinta), Despertar Campesino (conocido como la Finada, en El Paraíso). Frente a tan repentina e inesperada adhesión de los campesinos a formas independientes de filiación partidaria y organización productiva, el Estado respondió creando a su vez en zonas estratégicas Uniones ejidales coordinadas por la CNC, para restar poder e influencias a las demás organizaciones: así fue como se creó la Unión Juan Sabines, para oponer un frente cenecista a la Unión Estrella Roja (CIOAC);

⁴¹ Flores, *op. cit.*, p. 373.

la Unión Julio Sabinés, para desmovilizar a los integrantes de la Unión de Uniones en la zona de Palestina (región selvática), la Unión Jaime Sabinés en la Fraylesca, para desmovilizar a los integrantes de la Unión de Ejidos del Grijalva (OCEZ), etcétera. En 1987 existían 32 organizaciones campesinas en todo el estado de Chiapas.

3.6.3. *Las organizaciones políticas emergentes: crecimiento y debilitamiento del movimiento*

Aparte de la intensa actividad desarrollada por el clero y los laicos de la pastoral diocesana lascasense, las comunidades indígenas del norte y centro de Chiapas fueron alcanzadas por los proyectos de organización diseñados y promovidos por los integrantes de varias corrientes políticas exteriores a la zona, o sea, cuyos miembros provenían mayormente del centro del país. Esos "agentes exteriores"⁴² eran esencialmente jóvenes profesionales formados en la Universidad Nacional Autónoma de México, que habían participado en la experiencia democrática estudiantil de 1968 y se encontraban parcialmente desmovilizados a raíz de la fuerte represión acaecida entre 1968 y 1971. Muchos de ellos fueron formados en la Facultad de Economía, en el seminario coordinado por Adolfo Uribe, de donde saldrían los principales promotores del proceso de organización campesina independiente que se extendería considerablemente a partir de 1976. Miembros de este grupo académico crearían, al principio de la década de los 70, la corriente política proletaria conocida como Línea de Masas, la que iba a difundir sus propósitos y formas de lucha en varios estados del país. En Coahuila, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Veracruz y Chiapas, etcétera, se crearon centros de trabajo colectivo promovidos discretamente por dichos actores sociales, quienes buscaban establecer formas de organización colectiva entre las comunidades campesinas en distintos ámbitos: abasto, producción, distribución, comercialización, etcétera. La Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Autónomas que se formó en 1979 fue la cristalización a nivel nacional de los esfuerzos conjuntos y de las diversas experiencias organizativas iniciadas en la segunda parte de la década.

Varios fueron los elementos que condicionaron la instrumentación de esos programas de interacción con las comunidades campesinas. Por una parte, el gobierno populista, que se inició en 1971 con Luis Echeverría, pretendía borrar sustancialmente la mancha dejada por la represión estudiantil de 1968-71; fomentando la apertura política tanto a nivel de expresión como de acción; con el fin de lograr la "depresurización" de sectores sociales afectados por las contradicciones internas de un sistema muy expoliador, por una parte, y amenazados por las constricciones económicas de la crisis agrícola que empezaba a manifestarse en los primeros

⁴² *Ibid.*, p. 354.

años del sexenio, por la otra. Inició entonces el diálogo con quienes pretendían jugar el papel de promotores modernizantes del cambio estructural, entablando inclusive una serie de negociaciones que llevarían a ambas partes a interactuar coordinadamente, en favor de las comunidades y en torno a programas diseñados por el Estado, mediante la intervención de las instancias administrativas oficiales (SRA, CONASUPO, INMECAFE, SARH, BANRURAL, etcétera). El Estado manifestaba un creciente interés por iniciar la modernización de sectores atrasados, pero al hacerlo tenía que enfrentarse con las estructuras tradicionales de gestión que mediaban entre el propio Estado y los sectores populares. Los promotores voluntarios que irrumpían en la escena política regional servirían parcialmente a esos fines; y contarían, en un principio, con el apoyo del sector oficial. Sin embargo, las contradicciones existentes entre los objetivos declarados de las instancias oficiales y los resultados de su práctica de acción⁴³ provocaron posteriormente la ruptura entre los actores sociales involucrados (tanto promotores como integrantes de las colectividades de base) y los organismos encargados de llevar a cabo el proyecto federal de modernización. Además, los sectores afectados por el proceso (caciques, intermediarios, comerciantes, usureros, grandes propietarios, etcétera), reaccionaron inmediatamente y pidieron apoyo al Estado, que se vio obligado a asumir un rol ambiguo ante sus tradicionales aliados e interlocutores, amenazados en su proyecto tradicional de reproducción. Entre 1971 y 1974, período en el cual se instrumentaron las líneas de acción de la Corriente Proletaria y de la Organización Independiente Revolucionaria (OIR), el Estado tuvo que enfrentarse a la tarea de absorber los focos de insurrección campesina vinculada con la guerrilla en varios estados del norte, centro y sur del país. Los sectores afectados por la presencia de los militantes universitarios intentaron identificar a estos últimos como miembros de la corriente foquista; y varios de ellos (particularmente en Chiapas) fueron víctimas de una represión que caía indiscriminadamente sobre cualquier promotor del cambio estructural, independientemente de su filiación partidaria y de su pertenencia activa a un programa negociado o no con el Estado. Todo lo cual incitó a los distintos equipos a trabajar en una relativa clandestinidad, para lograr escapar a los peligros de la represión.

A partir de 1971, llegaron a Chiapas miembros de esa organización universitaria, los que se repartieron entre varias comunidades del norte del estado y de la zona selvática mayormente. Iniciaron el proceso de organización de las colectividades campesinas, asesorándolas para la recuperación de tierras agrícolas, su explotación de forma colectiva, la creación de circuitos de distribución y abasto, la implementación o el mejoramiento de las condiciones infraestructurales comunitarias, etcétera. Sin embargo, "en el transcurso de la acción directa al lado del campesinado, la orientación del grupo, así como sus métodos de trabajo y de articulación con

⁴³ *Ibid.*, p. 354.

las masas campesinas cambiaron, así como los de otros grupos democráticos".⁴⁴ "La concepción política del trabajo organizacional prevaleció a veces, en otros casos fue la tendencia economicista la que daba prioridad a las soluciones inmediatas de los problemas económicos, sin paulatinamente hacer progresar la organización campesina".⁴⁵ Las divergencias que se suscitaron adentro de la organización, en cuanto a formas, criterios y modalidades de acción prioritaria, provocó una honda ruptura entre sus miembros, lo cual los hizo más vulnerables ante los embates de la represión local. Por otra parte, su incapacidad para mantener vínculos de coordinación con los organismos oficiales responsables de encauzar el desarrollo de los programas federales, los condujo a un mayor aislamiento y a la progresiva atomización de su organización.

Durante los años 1971-1974, los universitarios miembros de esa corriente democrática entablaron relaciones de intercambio y coordinación con los agentes de la pastoral lascasense; de tal manera que participaron activamente al lado del clero progresista y de los laicos cristianos en la organización del Congreso indígena. Esa alianza, así como la que se estableció en un principio con los agentes del Estado, fue fugaz. En 1977, se produjo una ruptura irreversible entre la pastoral y la Línea de Masas, mayormente promovida por las autoridades eclesásticas diocesanas, al percatarse de la progresiva radicalización de varios sacerdotes y catequistas y al darse cuenta de que el movimiento campesino escapaba de sus cauces originales, cuestionando las estructuras políticas y económicas estatales, con el beneplácito e incluso el apoyo de miembros de la diócesis.

El año de 1977 fue decisivo en la conformación del movimiento organizado. En efecto, Jorge de la Vega Domínguez, quien era gobernador desde el principio del sexenio de Echeverría,⁴⁶ apoyaba discretamente los esfuerzos de organización campesina y pretendía mantener abierto un canal de comunicación con los agentes universitarios, tras haber sido uno de los negociadores a raíz del movimiento estudiantil de 1968; entregó a fines de 1976 el poder a Juan Sabines y regresó a la ciudad de México, para hacerse cargo de la Secretaría de Industria y Comercio. Repentinamente, los promotores de la organización campesina perdieron el apoyo que recibían, quizás indirectamente, de parte de De la Vega, a través de la coordinadora; interdependencia que él mismo había fomentado durante su gubernatura. Asimismo, los miembros de otras corrientes políticas en gestación (que integrarían ulteriormente el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Mexicano de los Trabajadores) y que, desde algunos años actuaban en zonas rurales del estado, se enfrentaron a las amenazas de represión que surgían de la partida del ex gobernador.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 356.

⁴⁵ *Ibid.*, pp. 361-362.

⁴⁶ En Chiapas, la toma de posesión del gobernador en la entidad se lleva a cabo el día antes de la toma de posesión del presidente de la República; lo cual permite que los programas federales puedan tener incidencia y seguimiento en función del sexenio presidencial.

La ruptura con la diócesis aconteció en esa misma época y los militantes de las distintas organizaciones, debilitados por sus contradicciones y divergencias internas, fueron fáciles presas de la respuesta violenta, orquestada por el ejército, que el nuevo gobernador dio a las reivindicaciones emanadas del sector rural. La represión se extendió de la depresión central a la zona selvática; varios de los actores sociales universitarios o miembros del clero diocesano renunciaron a su compromiso y abandonaron el estado; tanto en razón de la decisión de las autoridades eclesiásticas de quitar su apoyo al movimiento, como de la actitud que tomaron las autoridades civiles de imponer el respeto al *statu quo* durante el mandado del nuevo gobernador.

La ruptura con el Estado y con la Iglesia, la atomización de los equipos de promoción organizativa y la represión policiaca, favorecida por el cambio de política tanto federal (fin del período populista de Echeverría) como estatal (partida de De la Vega Domínguez), provocaron el desmantelamiento de la organización democrática interdisciplinaria, mas no la desestructuración del proceso organizativo iniciado por esa misma corriente. En efecto, la base campesina mantuvo y reprodujo el proyecto acordado primero con los agentes de la pastoral diocesana y luego con los universitarios de las distintas líneas democráticas, al conformar en este mismo año de 1977 la Unión de Uniones, que resultó ser la mayor organización campesina de Chiapas, al agrupar las distintas uniones ejidales creadas a raíz del congreso de 1974.

Varios de los promotores políticos y técnicos de esa unión regresarían posteriormente, por períodos, a trabajar a Chiapas, generalmente integrados a las diversas instituciones oficiales encargadas de desarrollar programas económicos y sociales en el medio rural. La experiencia de los años 70 les permitió sacar conclusiones que revitalizarían el movimiento campesino organizado en los años por venir y particularmente a partir de los años 80. Se integrarían a los canales oficiales de gestión y promoción, buscando aprovechar los recursos técnicos y financieros otorgados por el Estado, para el desarrollo rural; estimularían la opción de organización extensa y recurrirían inclusive a la difusión y divulgación de los objetivos, métodos y estrategias de los grupos asesorados, abandonando paulatinamente la semiclandestinidad en la que se desarrollaron en un primer período formativo.

3.6.4. Logros y problemas: el período de consolidación

A partir del sexenio de José López Portillo (1977-1982), se definió claramente la posición del Estado en materia de política agraria. En efecto, si por una parte dicha política consistía en vincular a los productores para incrementar la producción nacional (Sistema Alimentario Mexicano), por otra parte el Estado favorecía los enfrentamientos entre esos mismos pro-

ductores, apoyándose a tal efecto sobre una estructura agraria históricamente dominada por la burguesía regional. Chiapas había sido, en varias ocasiones, la escena de este tipo de ambigüedad y los esfuerzos organizativos de los distintos grupos de pequeños productores habían sido sistemáticamente solapados por intervenciones del Estado, cuando pretendían hacerse fuera de los canales preestablecidos a tal efecto y en contra de los intereses de la burguesía agraria tradicional. La experiencia de los años 70 iba a fructificar entre los grupos indígenas de Chiapas, en tanto que descubrían que la única solución viable a su problemática consistía en organizarse de forma amplia, para conseguir, por vías y medidas legales, los recursos necesarios para su desarrollo socioeconómico. Necesitaban retener los excedentes generados por su producción y evitar ser presa de los mecanismos de interceptación e intermediación.⁴⁷ A tal efecto, la Unión de Uniones conformó, en 1982, la Unión de Crédito Pajal Ya Kaktik (Jo hacemos juntos) que proporcionará (mediante el aval de FIRA) los recursos crediticios necesarios para el financiamiento de los proyectos productivos e infraestructurales de las uniones miembros.

El día en que se integró el primer consejo de administración, la Quiptic Ta Lecubtesel decidió romper con la Unión de Crédito, al ver rechazadas sus condiciones en cuanto a una participación mayoritaria de sus propios delegados en el seno del consejo (la Quiptic es, numéricamente, la Unión más importante). Debilitada, mas no vencida, la Unión de Uniones siguió con su propósito inicial: integró la Pajal Ya Kaktik y agrupa hoy en día a 6 000 familias indígenas, con un capital social de 5 000 millones de pesos.⁴⁸

En pocos años, la Unión de Crédito iba a lograr acumular los excedentes producidos por sus socios y evitar la descapitalización de las unidades de producción. En 1986, pagaba el café a \$ 1 300 el kilogramo, muy por encima del precio establecido por el INMECAFE. Su éxito fue tal que, independientemente de que pagara muy caro el café a sus agremiados (antes de exportarlo), contabilizó un excedente tan importante que los socios acordaron reinvertir inmediatamente en la compra de una explotación cafetalera de 350 has., localizada en el municipio del Bosque, la finca Kukalwitz. Pagaron la mitad del precio acordado⁴⁹ al contado y consiguieron un crédito del banco para el resto, pagable en 5 años más. Inmediatamente, los 6 000 copropietarios iniciaron la explotación de la finca a razón de 5 días de trabajo por año para cada socio. Se creó asimismo la Sociedad de Producción Rural Kipaltik, encargada de la gestión de la empresa agrícola.⁵⁰

⁴⁷ Información testimonial de Alain Retiere, asesor técnico de la Unión de Crédito Pajal Ya Kaktik, investigador del INAREMAC.

⁴⁸ El manejo financiero de la Unión de Crédito es todavía mayor y asciende a 12 mil millones de pesos con los créditos que controla.

⁴⁹ 250 millones de pesos.

⁵⁰ Realizando esporádicamente reuniones de información en comunidades no afiliadas.

80 has. de la finca son sembradas de cafetales; otras 80 has. son tierras cerriles y 190 has. son cubiertas con agostaderos en los que pastan 450 cabezas de ganado bovino. Para la explotación del ganado se creó la Sociedad de Producción Rural Unión Tierra Tzotzil, la que agrupa a 120 socios del municipio del Bosque, a su vez miembros de la Unión de Uniones, que compraron el ganado y lo explotan colectivamente. Se creó por fin una tercera sociedad de producción rural, integrada por los ex peones de la finca Kukalwitz (y de la vecina finca Trinidad); la que se llamó Tzotz Unión Progreso, con el fin de obtener créditos para crear una infraestructura de viviendas y servicios colectivos, tanto para los residentes permanentes, como para los trabajadores ocasionales de la Unión que vienen a trabajar a la finca.

Por fin, en mayo de 1987 se creó una coordinadora que se reúne cada mes, integrada por los delegados de cada sociedad de producción y por los representantes del consejo de administración de la Unión de Crédito, para velar por el buen funcionamiento de las distintas instancias productivas y evitar que se generen contradicciones o problemas que afecten al desarrollo de las actividades.

Independientemente de la ruptura acaecida en 1982 entre la Unión Quiptic Ta Lecubtesel y la Unión de Crédito Pajal Ya Kaktik (lo cual significó que aproximadamente 2 000 familias se abstuvieran de participar en los programas de dicha organización) y de la escisión que afectó bruscamente al grupo tojolabal en 1980, podríamos establecer que la Unión de los ejidos y comunidades de Chiapas está perfilándose como una alternativa tanto de producción como de negociación con las instancias oficiales encargadas de llevar a cabo el proyecto de modernización de las estructuras sociales de producción promovido por el Estado Nacional. Si bien la homogeneización del movimiento, en cuanto a formas de lucha y estrategias de organización se está expresando en los distintos programas que acabamos de describir, en cambio las rupturas y los enfrentamientos registrados internamente en 1980 y 1982 demuestran que la cohesión de la Unión es todavía vulnerable y que los agentes de la burguesía agraria tradicional tienen la fuerza suficiente para intervenir y desestabilizarla si consideran que ésta amenaza directamente su proyecto particular de acumulación.

Por otra parte, la Unión no ha logrado —aunque pretende seguirlo intentando— integrar a su organización a una cierta cantidad de comunidades de la selva, y particularmente a las que se encuentran fuertemente permeadas por las ideologías conservadoras protestantes y de las demás sectas provenientes de EE UU. Una de las principales consecuencias del proselitismo evangélico en esas comunidades consiste precisamente en su extrema nuclearización. Se presencia un fenómeno de intenso individualismo entre los miembros conversos de dichas aglomeraciones, que impide casi completamente su unificación en torno a programas de colectivización de recursos o de participación en obras y proyectos comunitarios. En tales circunstancias, la Unión de Uniones obviamente no logra ganar adhesión

a sus métodos de trabajo y gestión, ni tampoco las otras organizaciones que pugnan por la reunificación de los productores en pos de objetivos comunes.

CONCLUSIONES

En Chiapas, varias brechas han sido abiertas por los campesinos movilizad^{os}; como se trata de campesinos indígenas todavía fuertemente estructurados con base en ciertos códigos sociales que normalizan la práctica colectiva, las acciones críticas que han desarrollado en el transcurso de los últimos años han sido enmarcadas en las reivindicaciones de problemáticas peculiares, comunitarias, a menudo localistas. Ninguna de esas brechas trazadas por los indígenas o mestizos chiapanecos los ha llevado sin embargo hacia la consecución y satisfacción de sus objetivos de lucha. Se presencia una serie de esfuerzos orientados todos a cuestionar al sistema de producción y a las estructuras de control social, sin que se logre claramente vislumbrar su aglutinación en torno a un programa común. La dispersión y la nuclearización de las acciones sociales, al otorgar poder al aparato de control político, restan oportunidad de superación al propio movimiento campesino.

Durante años, los intentos de homogeneización de criterios y formas de lucha abortaron repentinamente en el nivel de la dirección o en fases iniciales de coordinación, traduciendo la fragilidad de las estrategias organizativas populares ante el implacable rigor del aparato de sujeción erecto por la oligarquía terrateniente regional con la complicidad de las autoridades políticas estatales. Sin embargo, se está vislumbrando en Chiapas un nuevo modelo de lucha social que otorga más representatividad y fuerza de expresión a los actores sociales que se solidarizan con él. Las alianzas efímeras, pero virtuales, entre varias líneas políticas de proyecto democrático, miembros de la pastoral diocesana de tendencia progresista y ciertos representantes de la burocracia federal, han contribuido a cimentar las bases de un nuevo plan de acción colectiva que se extiende progresivamente con errores y fracasos, pero también con resultados alentadores para quienes orgánicamente participan o periféricamente observan.

A pesar de sus rupturas, divisiones y equivocaciones, el movimiento organizado de los campesinos chiapanecos probablemente surgirá, en los años por venir, del esfuerzo tercamente hecho por miles de ellos para consolidar esa unión de comunidades indígenas, con base en proyectos productivos creados e instrumentados por ellos, independientemente de las imposiciones arbitrarias de quienes, desde hace siglos, controlan el quehacer económico y político del estado.

Posiblemente entonces el futuro del campesinado chiapaneco dependa de su capacidad de ofrecer al Estado un mayor frente de oposición; logrando, a pesar de sus diferencias etnoculturales, de sus particularidades

sociopolíticas o de sus proyectos económicos, la instrumentación de un canal de acción política y de organización colectiva que no se deje enzolver por la negociación o troncar por la represión; en fin: un nuevo camino hacia la democracia.

BIBLIOGRAFÍA

- BASSOLS B., Ángel: "Recursos naturales en México", *Teoría, conocimiento y uso*.
- FAVRE, Henri: "Changement culturel et nouvel indigénisme au Mexique", *Document N° 20 ERSIPAL*, París, 1981.
- FLORES, Margarita y Arturo León: *Eléments pour l'analyse de l'organisation des paysans producteurs de café. Etude de cas: des communautés indiennes au sud du Mexique*, tesis doctoral, París, I, 1979, 2 tomos
- MARION, Marie-Odile: *El movimiento campesino en Chiapas (1983)*, CEHAM, México, 1984.
- MARION, Marie-Odile: *El agrarismo en Chiapas*, en prensa, INAH.
- MESTRIES, Francis: "En Chiapas, primer congreso indígena", *Cultura y Sociedad*, año I, oct.-dic. 1974, pp. 59-68.
- RUZ, Mario: *Los legítimos hombres*, tomos I y II, Centro de Estudios Mayas, UNAM, México, 1981.
- SARH: *Plan de desarrollo agropecuario y forestal de Chiapas, 1982-1988*, tomo I.
- SPP: *Las actividades económicas en México*, 1983.
- ZERMEÑO, Sergio: "Adiós al 68", *Nexos*, septiembre de 1984.